



SALA TERCERA DE DECISIÓN LABORAL

AUDIENCIA DE JUZGAMIENTO

Medellín, diecinueve de abril de dos mil veintitrés

22-147

Proceso: ORDINARIO LABORAL- Apelación.
Demandante: **SERGIO FABIAN ZUÑIGA PAVÍA**
Demandado: **COLPENSIONES, PROTECCION S.A., PORVENIR S.A., SKANDIA Y UGPP**
Radicado No.: **05001-31-05-004-2016-01299-01.**
Tema: **Ineficacia Traslado**
Decisión: **CONFIRMA y ADICIONA**

La Sala Tercera de Decisión Laboral del Tribunal Superior de Medellín, conformada por los Magistrados **MARÍA NANCY GARCÍA GARCÍA, MARTHA TERESA FLÓREZ SAMUDIO** y como ponente **ORLANDO ANTONIO GALLO ISAZA**, procede a resolver el recurso de apelación interpuesto por Skandia y Protección S.A. contra la sentencia de primera instancia emitida en el proceso de la referencia

El Magistrado del conocimiento, doctor **ORLANDO ANTONIO GALLO ISAZA**, en acatamiento de lo previsto en el artículo 13 de la Ley 2213 de 2022, sometió a consideración de los restantes integrantes el proyecto aprobado en Sala virtual mediante **ACTA 011** de discusión, que se adopta como sentencia, en los siguientes términos:

1. SÍNTESIS FÁCTICA y ANTECEDENTES

1.1. LO PRETENDIDO

Solicita el demandante, que tras la declaratoria de **INEFICACIA y/o NULIDAD** del traslado a las administradoras del RAIS, se tenga como válidamente afiliado al régimen de prima media con prestación definida, ordenándose a OLD MUTUAL S.A. trasladar a COLPENSIONES y/o a la UGPP todos y cada uno de los aportes incluyendo los frutos y rendimientos que reposen en su cuenta de ahorro individual además del bono pensional. Consecuencialmente solicita que se ordene a estas últimas entidades recibir dichas sumas y reactivar la afiliación en el sistema.

1.2. PARA FUNDAMENTAR SUS PRETENSIONES, EXPUSO LOS SIGUIENTES HECHOS:

- ✓ Que nació el 19 de julio de 1954 por lo que en la actualidad cuenta con más de 62 años de edad.
- ✓ Que estuvo afiliado a CAJANAL desde el 01 de junio de 1988 hasta el 30 de noviembre de 1996.
- ✓ Que posteriormente estuvo afiliado al ISS desde el 14 de junio de 1994 hasta el 31 de diciembre del mismo año.
- ✓ Que el 31 de octubre de 1996, cuando tenía 42 años y 510.84 semanas cotizadas, se trasladó al Régimen de Ahorro Individual cuando suscribió el formulario de afiliación a Porvenir bajo la asesoría escueta, precaria, engañosa y equivocada otorgada por un asesor, quien le manifestó que su pensión sería superior, lo que no resultó ser cierto, pero sin informarle los beneficios y perjuicios que acarrearía dicho traslado, pues no le indicó en forma clara cuales serían las condiciones para acceder a la pensión de vejez en el RAIS ni las características de este régimen (las cuales enlista)
- ✓ Que ha realizado varios traslados de AFP dentro del RAIS (COLMENA, ING Y SANTANDER, hoy asumidos por PROTECCIÓN S.A), estando actualmente afiliado a la OLD MUTUAL S.A, desde el 17 de febrero de 2015.
- ✓ Que en octubre de 2010 solicitó al ISS el traslado al RPM, petición que no fue resuelta de fondo por parte de la entidad.
- ✓ Que en abril de 2016 realizó solicitud a OLD MUTUAL S.A., PORVENIR S.A., UGPP y a COLPENSIONES solicitando la anulación de la afiliación a dicho fondo y que, a su vez, se le permitiera el regreso a COLPENSIONES y/o UGPP. Dicha petición que fue resuelta de forma negativa.

1.3. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA

Controviertieron las entidades demandadas el derecho pretendido.

Inicialmente se pronunció **OLD MUTUAL hoy SKANDIA** aceptando la fecha de vinculación del demandante a esta APF y la presentación de una reclamación administrativa por parte del mismo. Aclara que en la respuesta a dicha petición se le especificó que el actor fue debidamente asesorado al momento de la suscripción del formulario de vinculación y que debido a que este provenía de otra administradora del RAIS, la citada vinculación se generó de manera libre, voluntaria e informada. Además, que el traslado no era viable porque el demandante se encuentra incurso en la prohibición de traslado de régimen por faltarle menos de diez (10) años para pensionarse. Sobre los demás hechos indicó que no le constan.

Por su parte, **PORVENIR** negó el incumplimiento del deber de información al señalar que suministró información oportuna, clara, suficiente, concreta, adecuada y veraz y que brindó una asesoría completa y detallada sobre las características y condiciones del RAIS y su diferencia con el RPM, que le informó que el monto de la pensión dependía directa y exclusivamente del afiliado y no de la administradora del RAIS. Adujo que el actor no puede endilgar responsabilidad a esta AFP debido a que su traslado obedeció a una decisión libre, espontánea y consciente. Agregó que se evidencia la voluntad del demandante de permanecer al RAIS pues ha realizado 4 traslados en el mismo régimen durante 21 años.

COLPENSIONES aceptó la fecha de nacimiento del actor y frente a las solicitudes presentadas por él en octubre de 2010 y abril de 2016, adujo que acepta el hecho siempre y cuando en el expediente obre prueba idónea.

Por su parte la **UGPP** aceptó los hechos relativos a la fecha de nacimiento del actor, la afiliación a CAJANAL, COLPENSIONES y a Porvenir SA y adujo que frente a la solicitud presentada por el demandante el 18 de abril de 2016 le comunicó que no tenía competencia para pronunciarse, toda vez que no fue la última entidad que recibió los aportes.

Y por último, **PROTECCIÓN S.A.** únicamente aceptó la fecha de nacimiento de actor y frente a los demás hechos indicó que no le constaban por tratarse de hechos ajenos a la entidad.

1.4. DECISIÓN PRIMERA INSTANCIA

Mediante sentencia proferida el 14 de junio de 2022, el Juzgado Veinticuatro Laboral del Circuito de Medellín declaró la ineficacia de la afiliación al RAIS del demandante y **CONDENÓ** a SKANDIA S.A. trasladar a Colpensiones, en el mes siguiente a la ejecutoria de la sentencia, los saldos de la cuenta de ahorro individual, con los rendimientos financieros además de los bonos pensionales que se encuentren o no en la cuenta de ahorro individual que llegaron al fondo en los periodos de afiliación, el porcentaje cobrado por comisiones, los gastos de administración, las primas de seguros previsionales de invalidez y sobrevivencia y el porcentaje destinado al fondo de garantía de pensión mínima debidamente indexados y con cargo a sus propios recursos, durante el tiempo en que el demandante estuvo afiliado a la administradora. Además, ordenó que al momento de cumplir la orden, los conceptos deberán aparecer discriminados con sus respectivos valores, junto con el detalle pormenorizado de los ciclos, IBC, aportes y demás información relevante que los justifiquen.

CONDENÓ a PORVENIR S.A. y a PROTECCIÓN S.A. a trasladar a COLPENSIONES, en el mes siguiente a la ejecutoria de la sentencia, el porcentaje cobrado por comisiones, gastos de administración, las primas de seguros previsionales y el porcentaje destinado al fondo de garantía de pensión mínima, durante el tiempo en que el demandante estuvo afiliado a cada uno de los fondos, con cargo a sus propios recursos

Finalmente condenó en costas a Porvenir S.A. fijando como agencias en derecho la suma de dos SMLMV a favor del demandante.

Dentro del término concedido por la ley, SKANDIA S.A y PROTECCIÓN S.A interpusieron y sustentaron recurso de apelación.

2. ARGUMENTOS

2.1. DE LA JUEZ PARA DECIDIR

La decisión se motivó en el incumplimiento del deber de información por parte de las administradoras del RAIS, en quién recaía la carga de acreditar la existencia de una asesoría clara, completa y veraz, lo que no ocurrió, sujetándose para el efecto en las sub-reglas sentadas en la línea jurisprudencial de la Sala de Casación Laboral.

2.2. RECURSOS DE APELACIÓN

2.2.1. APELACIÓN SKANDIA

Señaló que debe revocarse la orden de devolver los conceptos diferentes a los saldos de la cuenta de ahorro individual y rendimientos, tales como: bonos pensionales, porcentajes de comisiones, gastos de administración y las primas de seguros previsionales de sobrevivencia e invalidez, toda vez que según concepto de la Superintendencia Financiera del año 2020, estos conceptos no deben ser retornados en los eventos en los que se declare el traslado del afiliado al RDPMPD por la ineficacia de la afiliación al RAIS.

Agregó que debido a la afiliación del demandante con Skandia se generaron unos valores adicionales que beneficiaron e incrementaron la cuenta de ahorro individual. Por tanto, los conceptos que se ordenó devolver tienen como finalidad retribuir la gestión que legalmente estaba a cargo de la AFP y

que, como se demostró, se ha hecho de acuerdo y conforme a la Ley, por lo que es claro que estos conceptos no pertenecen al demandante, ni tampoco al Régimen de Prima Media pues según la ley, es la AFP que administra la cuenta de ahorro individual la única autorizada para cobrarlos.

Adujo que la comisión de administración no conforma los recursos pensionales mediante los cuales se financian las prestaciones económicas que eventualmente se causan, por tanto, los valores que se cobran por ese concepto son independientes de los que existen en la cuenta de ahorro individual y de los rendimientos generados a favor del afiliado. Ante el eventual traslado de estos, la AFP Skandia tiene el derecho legalmente establecido de conservar los conceptos recibidos por la administración que efectuó de los dineros existentes en la cuenta de ahorro individual, por lo que resultaría desatinado pensar que el fallo de primera instancia es correcto en ese sentido, pues se está beneficiando económicamente a una entidad por un manejo que no ha efectuado y a su vez, se estaría despojando a Skandia de un dinero que recibió en función de sus obligaciones legales como administradora de fondos de pensiones y a satisfacción del afiliado con un resultado positivo en términos económicos. Finalmente, señaló que la ley es la que ordena el cobro por administración y que dicha actividad se efectúa conforme a ese precepto legal, por lo que la sanción impuesta a Skandia configuraría una prescripción que iría en contra de la disposición proferida por la Superintendencia Financiera.

2.2.2. APELACIÓN PROTECCIÓN

Solicitó que se excluyera del fallo de primera instancia la orden de devolver los gastos de administración y seguro previsional, toda vez que durante todo el tiempo en que el demandante estuvo afiliado a Protección, la administración fue diligente y cuidadosa con el dinero y el ahorro de la cuenta individual del actor, lo cual se constata en los rendimientos financieros adjuntos al proceso, mismos que fueron trasladados cuando se dio el traslado de administradora. Ahora bien, las restituciones mutuas contempladas en el artículo 1746 del Código Civil, puede considerarse que, aunque se declare la ineficacia de la afiliación del demandante al RAIS y que se haga la ficción de que este acto nunca existió, no se puede desconocer que el bien administrado produjo rendimientos por la buena administración de Protección, es por ello que esta entidad debe conservar dichos frutos. Además, al declararse la devolución de los gastos de administración se estaría constituyendo un enriquecimiento sin causa a favor del demandante y en detrimento del patrimonio de Protección pues estaría recibiendo los rendimientos generados por una buena administración los cuales no constituyen parte de la cuenta de ahorro individual.

Respecto a la devolución del seguro previsional, manifestó que Protección está imposibilitada para recobrar dicho pago a la aseguradora y por consiguiente, en caso de que se haga efectivo el traslado de estos emolumentos, por lo que Protección tendría que asumirlo con cargo a su propio patrimonio constituyendo así un enriquecimiento sin justa causa para el demandante y vulnerando el derecho a la igualdad que le asiste a esta entidad. Por tanto insistió en que los gastos de administración y el seguro previsional tienen como fin el buen manejo de los recursos y la protección de los afiliados.

2.3. ALEGATOS DE CONCLUSIÓN

2.3.1. PRESENTADOS POR OLD MUTUAL

De forma expresa señaló que la prueba recaudada logró establecer el cumplimiento de la ley por parte de OLD MUTUAL PENSIONES Y CESANTÍAS, S.A, hoy Skandia S.A., como administradora de fondos de pensiones. Es por ello que se hace imperioso resaltar la validez de la vinculación del señor Zúñiga Pavía con OLD MUTUAL PENSIONES Y CESANTÍAS S.A., destacándose que, según informó el demandante al absolver interrogatorio de parte, durante el tiempo en que éste estuvo vinculado con la AFP, se cumplieron todas las obligaciones y requisitos legales establecidos, en especial las de una competente asesoría e información. Aclarándose además que, al momento del traslado del accionante a OLD MUTUAL, ya el señor Zúñiga Pavía, se encontraba inmerso en la prohibición de traslado de régimen, por la edad. Siendo claro que, el deber de asesoría previa a la edad límite para su traslado, no correspondía a esta entidad sino a la AFP donde el actor estaba vinculado antes de cumplir los 52 años de edad. Old Mutual no tenía posibilidad de interferir en la decisión del actor de permanecer en el RAIS o regresar al RPMPD, pues ya había excedido el tiempo límite para hacerlo. Improcedencia legal de la orden de devolución de gastos de administración, seguros y reaseguros y aportes al fondo de garantía mínima. Contra la decisión proferida en su momento por el AQUO, se elevó la correspondiente inconformidad, sustentándose el recurso de alzada, en forma parcial, en la improcedencia legal de lo ordenado por dicho fallador, a cargo de Old Mutual, al condenarla a devolver emolumentos que fueron causados de manera legal, tales como los cuotas de administración, aportes a seguros previsionales y aportes al fondo de garantías de pensión mínima; dineros éstos que irremediablemente debían ser descontados o pagados por el usuario administrado, independientemente del régimen al cual perteneciera, pues tales valores permiten garantizar el buen manejo de los dineros existentes en la cuenta de ahorro individual del afiliado, con la consecuente obtención de rendimientos en favor del actor; además de poderse garantizar el derecho a las prestaciones económicas, en caso de ocurrir las contingencias de muerte, invalidez o vejez. Por lo expuesto, no resulta razonable que las cosas vuelvan a su estado anterior y se condene a devolver unos dineros a los que Old Mutual ya les dio el buen y legal uso para el cual fueron cobrados, siendo

ilógico que, si el acto de afiliación no existió, se produzcan este tipo de consecuencias sobre situaciones que están jurídicamente consumadas. Al respecto, y como bien se indicó al sustentar el recurso, la Superintendencia Financiera de Colombia, mediante la Circular del 17 de enero de 2020, emitió concepto indicando que ni la prima de seguro previsional ni las comisiones de administración deben ser devueltas por las AFP; de manera que, frente a los criterios técnicos a los que se refiere esta entidad, es importante señalar que resulta jurídicamente improcedente lo dispuesto en la providencia a primera instancia, a cargo de la AFP Old Mutual.

Finalmente, acorde a lo anteriormente expuesto solicitó la revocatoria parcial de la sentencia proferida por el Juzgado Cuarto Laboral del Circuito de Medellín en fecha 13 de junio de 2022, en lo atinente a la devolución de los gastos de administración, aportes por seguros y reaseguros y aportes al fondo de garantía mínima, causados legalmente con ocasión de la administración de la cuenta de ahorro individual en favor del señor Sergio Zúñiga Pavía.

2.3.2. ALEGATOS DE LA UGPP

Reiteró e insistió sobre los argumentos expuestos por la entidad a lo largo del proceso teniendo en cuenta que en ellos se expuso de manera razonada los argumentos de defensa y que NO obran nuevas pruebas ni debate que amerite un nuevo análisis de los hechos ni desde el punto de vista fáctico ni jurídico argumentativo. Manifiesta la conformidad de con el fallo dictado en primera instancia por el Juzgado 24 Laboral, al absolver a LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTIÓN PENSIONAL Y PARAFISCALES UGPP, teniendo en cuenta que es un fallo que analizó a cabalidad la prueba obrante en el proceso y logró estructurar desde los puntos facticos y normativos, -de manera coordinada y lógica- las premisas necesarias para llegar a la conclusión que no era posible efectuar condena alguna en contra de esta entidad; pues para este asunto, era claro que la carga prestacional estaba en cabeza de COLPENSIONES como administradora del régimen de prima media.

Ahora bien, teniendo en cuenta las pruebas aportadas al proceso, se evidencia que el último fondo que reporta el demandante fue PORVENIR S.A, por tal motivo, resulta evidente la falta de legitimación en la causa por parte de la UGPP en el asunto. En igual sentido, y en virtud al presupuesto procesal de falta de legitimación en la causa por pasiva por falta de competencia de la función administrativa en cabeza de la Unidad, le asiste razón al despacho de primera instancia, toda vez que de conformidad con la Ley 1151 de 2007 - Art. 156, Decreto 5021 de 2009 art 2, artículo 6, la UGPP no es administradora de pensiones y una vez verificada la lista de funciones no se encuentran las de efectuar la captación, consecución, gestión, rentabilidad, depuración de los aportes o cotizaciones ni la de resolver solicitudes de traslado entre el régimen de Prima Media al Régimen de Ahorro Individual; por

consiguiente, UGPP no tiene capacidad para actuar en estos casos por cuanto no es competente para resolver solicitudes de traslado ni del reconocimiento y pago de derechos pensionales a cargo de las entidades que aún la UGPP no ha recibido la función pensional y la defensa judicial. Finalmente, de conformidad con lo expuesto con la sentencia impugnada, solicita la misma sea confirmada por cuanto fue proferida conforme a las normas que regulan la situación discutida. De igual manera, solicita al Honorable Tribunal se estudie la viabilidad de una condena en costas a favor de la UGPP, ya que fue llamada a este proceso y resulto absuelta de las pretensiones.

3. DETERMINACIÓN DEL PROBLEMA JURÍDICO EN ESTA INSTANCIA

De acuerdo con lo planteado en los recursos de alzada, parecería que el problema jurídico a resolver estribaría únicamente en determinar qué haberes le corresponde retornar a las administradoras del RAIS.

No obstante lo anterior, conforme lo señalado por nuestro órgano de cierre, se examinará en grado jurisdiccional de consulta aquellos aspectos que pese a ser adversos Colpensiones, no fueron objeto del recurso de apelación, al ser el Estado garante dicha entidad conforme lo normado en el art. 69 del CPT y la SS, disposición en virtud de la cual se faculta a este órgano a adicionar, aclarar y/o modificar la providencia en los ítems que resulten necesarios.

Por ello inicialmente se establecerá si es dable declarar la ineficacia de la afiliación del demandante a la sociedad administradora de fondo de pensiones a través de la cual se trasladó al régimen de ahorro individual con solidaridad, analizando lo atinente a la aplicabilidad de lo que en torno al tema ha dispuesto la Corte Suprema de Justicia.

Es de aclarar, que si bien la UGPP indica que se debe revocar la condena en costas en su contra, únicamente se examinarán los temas que hayan sido mencionados en el recurso de alzada, el cual no fue interpuesto por dicha demandada, pues es esta y no otra, la oportunidad propicia para ventilar su descontento con la decisión adoptada en primera instancia, sin que los alegatos comporte una etapa que le permita introducir nuevos temas a estudiar.

4. CONSIDERACIONES

A juicio de esta Magistratura, el corpus argumentativo que ha construido la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia para este asunto de la ineficacia de los traslados, se ha ido ampliando con el

paso de los años. Es así como en la sentencia con radicado 31.989 de 2008, reiterada en las sentencias de radicación 31.314 del 09 de septiembre de 2008 y 33.083 del 22 de noviembre de 2011, la Corte abordó el estudio del asunto bajo el enfoque de la nulidad del acto, acontecida como consecuencia de un vicio en el consentimiento al suscribir los formularios de afiliación con los cuales se materializaba su traslado al RAIS, señalando que dicho consentimiento se afectó determinadamente por el engaño al que fueron sometidos por parte de los asesores de los Fondos de Pensiones demandados y que los llevó a tomar una decisión que iba contra sus intereses.

Posición que mudó posteriormente, para adscribirse a lo que ha denominado la ineficacia, cuando adujo que *solo a través de la demostración de la existencia de la libertad informada para el cambio de régimen, es que el juzgador podría avalar su transición; no se trata de demostrar razones para verificar sobre la anulación por distintas causas fácticas, sino de **determinar si hubo eficacia en el traslado***. (Sentencia con radicado 46.292 de 2014).

Desde un comienzo, la tesis de la ineficacia se ha apoyado en dos disposiciones normativas contenidas en la Ley 100 de 1993: el literal b) del artículo 13, que señala el carácter libre y voluntario de la elección del respectivo régimen y las posibles sanciones para quien atente contra ese derecho; y el artículo 271, donde se establecen las respectivas sanciones para quienes coarten esa libre selección al afiliarse y se indica que la misma quedará sin efecto.

Al desecharse la vía de la nulidad, ya NO es preciso acudir a lo normado en el art. 1750 del Código Civil, que contempla el plazo de cuatro años para interponer la acción de rescisión por nulidad relativa, ni tampoco resultó posible que con la re-asesoría que los Fondos privados brindaban en muchas ocasiones, se pudiera convalidar ese traslado original.

Por las consecuencias que la Sala Laboral ha derivado de la ineficacia de los traslados al RAIS, resulta claro que ha optado por la ineficacia por inexistencia del acto jurídico, en este caso, por la ausencia total de consentimiento al momento de la afiliación o del traslado, siendo ese consentimiento un elemento de la esencia del negocio.

Punto en que la jurisprudencia del trabajo se ha explayado en razones para explicar cómo en los casos donde ha prosperado la declaratoria de la ineficacia, se ha estado en ausencia de un **consentimiento informado**, entendido como *un procedimiento que garantiza, antes que aceptar un ofrecimiento o un servicio, la comprensión por el usuario de las condiciones, riesgos y consecuencias de su afiliación al régimen. Vale decir, que el afiliado antes de dar su consentimiento, ha recibido información clara, cierta, comprensible y oportuna*. (Sentencia con radicado 68838 de mayo de 2019). Lo cual en ningún

caso puede subsanarse con la firma en señal de aceptación en un formato previamente determinado por la AFP.

Ese deber de información ha estado presente desde la creación del Sistema de Seguridad Social Integral en Colombia. E incluso desde antes. En efecto, el Decreto 663 de 1993, «Estatuto Orgánico del Sistema Financiero», aplicable a las AFP desde su creación, prescribió en el numeral 1° del artículo 97, la obligación de las entidades de «suministrar a los usuarios de los servicios que prestan la información necesaria para lograr la mayor transparencia en las operaciones que realicen, de suerte que les permita, a través de elementos de juicio claros y objetivos, escoger las mejores opciones del mercado».

La propia corte, en la sentencia 68.838, multireferenciada, elabora un cuadro que intenta mostrar la evolución normativa en la materia. Así:

Etapas acumulativas	Normas que obligan a las administradoras de pensiones a dar información	Contenido mínimo y alcance del deber de información
Deber de información ETAPA EN LA QUE SE ENCONTRABA EL DEMANDANTE	Arts. 13 literal b), 271 y 272 de la Ley 100 de 1993 Art. 97, numeral 1.° del Decreto 663 de 1993, modificado por el artículo 23 de la Ley 797 de 2003 Disposiciones constitucionales relativas al derecho a la información, no menoscabo de derechos laborales y autonomía personal	Ilustración de las características, condiciones, acceso, efectos y riesgos de cada uno de los regímenes pensionales, lo que incluye dar a conocer la existencia de un régimen de transición y la eventual pérdida de beneficios pensionales
Deber de información, asesoría y buen consejo	Artículo 3.°, literal c) de la Ley 1328 de 2009 Decreto 2241 de 2010	Implica el análisis previo, calificado y global de los antecedentes del afiliado y los pormenores de los regímenes pensionales, a fin de que el asesor o promotor pueda emitir un consejo, sugerencia o recomendación al afiliado acerca de lo que más le conviene y, por tanto, lo que podría perjudicarle
Deber de información, asesoría, buen consejo y doble asesoría.	Ley 1748 de 2014 Artículo 3.° del Decreto 2071 de 2015 Circular Externa n.° 016 de 2016	Junto con lo anterior, lleva inmerso el derecho a obtener asesoría de los representantes de ambos regímenes pensionales.

Se exige entonces una índole de consentimiento tan específico por parte de un afiliado, que una mínima variación en el proceso de asesoría comporta la declaración de que hubo ausencia total de consentimiento y, por lo mismo, ineficacia por inexistencia del acto jurídico.

Pero, además, al invertirse la carga de la prueba, le basta al actor afirmar que no obtuvo la información adecuada cuando transitó entre los regímenes, para que sea el fondo de pensiones el que deba desplegar la actividad probatoria necesaria para demostrar ese cabal acompañamiento. En tal sentido, se insiste, ni el paso del tiempo impide accionar contra un acto que no existió ni la oportuna re-asesoría, cuando ella se presenta, puede sanear lo que feneció al nacer.

Un párrafo de la pluricitada sentencia 68.838 de 2019 es elocuente:

De hecho, la regla jurisprudencial identificable en las sentencias CSJ SL 31989, 9 sep. 2008, CSJ SL 31314, 9 sep. 2008 y CSJ SL 33083, 22 nov. 2011, así como en las proferidas a la fecha CSJ SL12136-2014, CSJ SL19447-2017, CSJ SL4964-2018, CSJ SL4989-2018 y SL1452-2019, es que las administradoras de fondos de pensiones deben suministrar al afiliado información clara, cierta, comprensible y oportuna de las características, condiciones, beneficios, diferencias, riesgos y consecuencias del cambio de régimen pensional y, además, que en estos procesos opera una inversión de la carga de la prueba en favor del afiliado.

La mirada censora de la Corte sobre estos procedimientos de las AFP se ha ido ampliando, desde los afiliados que tenían el beneficio de transición o estaban próximos a pensionarse, hasta toda clase de afiliados. Este último fallo lo reafirma:

Lo anterior, se repite, sin importar si se tiene o no un derecho consolidado, se tiene o no un beneficio transicional, o si está próximo o no a pensionarse, dado que la violación del deber de información se predica frente a la validez del acto jurídico de traslado, considerado en sí mismo.

Así las cosas, tanto del recuento realizado como del interrogatorio absuelto por el demandante, se desprende, de un lado, que para la época del traslado inicial al RAIS, concretamente 31 de octubre de 1996 cuando suscribió el formulario de vinculación a PORVENIR S.A. (fl 49 del archivo 002 del expediente digital), existía la normatividad ya citada que aludía a la existencia de un **deber de información**, y de otro lado, que escaso era el conocimiento que tenía el actor respecto del funcionamiento de ambos regímenes, estando el traslado en su momento motivado por la injerencia de su empleador para acceder o conservar un puesto de trabajo y a la extinción del ISS, panorama bajo el cual, más que promocionarse el RAIS como una alternativa, era prácticamente una imposición ante el temor que fundaba tal aseveración.

Y es que expresamente el señor SERGIO FABIAN ZÚÑIGA PAVÍA en el aludido interrogatorio expuso que es médico especialista. Relató que cuando regresó al país después de haber estudiado en el exterior, se vinculó al Instituto Nacional de Cancerología y el director de la entidad fue quien realizó una convocatoria de afiliación a un fondo privado de pensiones debido a que el ISS se iba a acabar. Indicó que él y otros especialistas tuvieron que pagar \$20.000 pero desconoce si este dinero estaba destinado para los abogados o para los asesores de Porvenir, que posteriormente los citaron a una reunión en donde firmaron la vinculación al RAIS, que debido al panorama de extinción del ISS *asumió que el traslado a un fondo privado era lo correcto* y fue en ese momento en el que notó que se trataba de un régimen diferente. Posteriormente adujo que el traslado a Porvenir no obedeció a ninguna decisión personal, sino que se dio debido a la injerencia de su empleador, es decir, su traslado se dio por una orden del director del Instituto de Cancerología en donde trabajaba porque de no afiliarse, no hubiera podido pertenecer a la institución. Indicó que no recibió asesoría, sino que fue algo mecánico pues solo firmó, que los únicos aspectos que conocía era el panorama de extinción del ISS, que los

fondos privados eran una mejor alternativa y que tendría una mejor pensión pues la rentabilidad del fondo privado sería mayor y eso le permitiría vivir mejor al momento de su retiro, que muchos años después un compañero fue quien le habló sobre la posibilidad de hacer aportes voluntarios para tener una mejor pensión pero que por parte de la AFP no tuvo ninguna asesoría.

Mencionó que su motivación para trasladarse al Régimen de Prima Media es tener una mejor pensión, pues tras comparar las proyecciones pensionales en ambos regímenes *notó realmente lo que pasó años tras al firmar el formulario de vinculación*, que además de la diferencia en el monto de la pensión también está motivado por tener una buena calidad de vida junto a su familia, que antes de cumplir los 52 años no se acercó a Colpensiones a solicitar el traslado de régimen. Aludió que cuando tenía 61 años se trasladó a Old Mutual debido a que una de sus colegas del Instituto de Cancerología de Medellín le comentó que *era un mejor fondo porque la rentabilidad era más alta y brindaban asesoría*, que fue ahí cuando solicitó la asesoría (una promotora fue a su oficina) y el traslado, que recuerda haber firmado formulario de vinculación con la entidad, que no conoce el monto total de sus aportes y que recibe extractos por parte de esta entidad.

Frente a su afiliación a Colmena hoy Protección indicó no recuerda haber suscrito ningún formulario de vinculación, sino que se dio cuenta de ello por los extractos y no recuerda que en el año 2013 haya recibido una asesoría por parte de Protección. Posteriormente afirmó que es su firma y sus datos los que están consagrados en el formulario de afiliación pero que los mismos no fueron escritos por él, que probablemente fue un trámite que hizo el área de recursos humanos de la institución, pero el desconoce el trámite y reconoce que no recibió ninguna asesoría, que no recuerda haber hecho aportes voluntarios

Destáquese que el deponente NO aceptó tener una formación en seguridad social de la que pudiese predicarse una comprensión del tema, máxime cuando ni siquiera se acreditó la existencia de una explicación completa por parte del asesor.

En todo caso, lo cierto es que no se vislumbra una suficiente ilustración, ni siquiera en asuntos tan relevantes como aportes voluntarios, pese a la trascendencia de este aspecto en la obtención de una pensión en un monto mayor en contraste con la que percibiría del régimen de prima media, máxime si este es uno de los atractivos con los que más se publicita este sistema; tampoco se le habló de modalidades de pensión, la posibilidad de acceder a una garantía de pensión mínima, los requisitos para causar la prestación por vejez en uno y otro régimen, las principales diferencias de cada uno, lo atinente a la redención del bono pensional y ello sólo por mencionar algunos aspectos que debieron ser abordados en esa reunión inicial. Pero nada de ello se dijo, o por lo menos no se acreditó.

Tampoco existían las herramientas financieras o la tecnología para realizar algún tipo de cálculo, de ahí que esta Sala cuestione la dificultad para establecer, en aquella época, cuál régimen le era más favorable a una persona, pues realmente el monto de la pensión es uno de los aspectos que tiende a inclinar la balanza a la hora de la escogencia de un fondo, prestación en un principio depende de un capital mínimo exigido, punto que NO ERA clarificado en forma suficiente para efectos de que una persona entendiera que de NO alcanzar el ahorro necesario NO se pensionaría, o por lo menos que la prestación dependía del capital acumulado en toda la vida laboral, aunado a la incidencia de factores externos impredecibles a futuro (composición del grupo familiar, fluctuación de los IBC y variación del mercado, etc) haciéndole un estimativo de cuánto dinero se requería sólo para financiar un salario mínimo, panorama bajo el cual entendería la necesidad de planear su futuro pensional para acceder a una cuantía mayor, pero tal aspecto también se omitió, o por lo menos, se insiste, no se acreditó lo contrario.

Empero, lo antes expuesto no debe comportar un foco de distracción, pues era a la administradora del RAIS y no a la parte actora, a la que le correspondía probar, como se indicó, que con antelación al diligenciamiento del formulario de traslado mediaba un consentimiento informado, el que en el caso aquí analizado se echó de menos. Ello aunado a que ninguna confesión podría desprenderse de la versión dada por el accionante, pues se insiste, ni siquiera le explicaron las ventajas y desventajas de cada régimen.

Ha de agregarse que ninguna variación genera la **MOVILIDAD** entre diferentes administradoras del RAIS que se presentó en el caso del señor Sergio Fabian, quien en 1995 se vinculó a Colpatria, comenzando su amplio trasiego por Colpatria, Porvenir, Protección y Old Mutual conforme se aprecia en el reporte del SIAFP (fl. 55 archivo 28), siendo Old Mutual el fondo donde actualmente permanece desde el último cambio efectuado en el año 2015 (fl. 92 archivo 002). Lo anterior por cuanto, de un lado, importa es examinar lo acontecido al momento de cambiar de régimen, y de otro lado, cuando hay movilidad entre fondos privados, la asesoría NO suele referirse a las características del sistema de prima media, mucho menos a las implicaciones del cambio de sistema pensional, dado que son otras circunstancias las que se resaltan; no es lo mismo promover el cambio de una administradora a otra, a promover un cambio de régimen pensional, pues en el primer caso, por regla general, sólo se publicita la rentabilidad de uno u otro fondo, lo que a voces del demandante, fue precisamente lo que sucedió, donde la solidez era un factor determinante.

En todo caso, si las AFP incumplieron su deber de información y por consiguiente debe declararse la ineficacia de la afiliación al régimen de ahorro individual con solidaridad, esa determinación implica privar de todo efecto práctico al traslado, por lo que mal haría esta Magistratura en siquiera pensar o

asimilar una MOVILIDAD entre administradoras del RAIS, a una convalidación, por definirlo de alguna manera, de un acto jurídico que nunca existió.

Fue precisamente este el raciocinio de la Sala de Casación Laboral en sentencia de radicación SL4705-2021, cuando recalcó que:

En consonancia con lo antes señalado, debe resaltar la Corte que, desde la sentencia CSJ SL, 9 sep. 2008, rad. 31989, se ha sostenido que, una vez acreditada la ineficacia del traslado al régimen de ahorro individual, **el acto jurídico no se torna en eficaz por los cambios que los afiliados hagan entre administradoras privadas** lo que ha sido reiterado entre otras en las providencias CSJ SL2877-2020, CSJ SL1942-2021 y CSJ SL1949-2021

El anterior criterio es el que se encuentra vigente en la jurisprudencia de la Sala; motivo por el cual se recoge cualquier otro que le sea contrario y, frente a la cual se advierte que, como la declaratoria de ineficacia del traslado tiene como sustento el incumplimiento del deber de información en el traslado inicial, **al estar afectado el acto jurídico primigenio, los negocios jurídicos subyacentes adolecen de igual afectación**, entre ellos los traslados que se efectúen a los diversos fondos privados, ello en tanto que, el efecto de la declaratoria de ineficacia es volver al statu quo, lo que implica retrotraer la situación al estado en que se hallaría si el cambio de sistema pensional no hubiera existido jamás (CSJ 4025-2021, CSJ SL4062-2021, CSJ SL 4064-2021, entre muchas otras).

Luego entonces, para la Sala es claro que, en el presente asunto ni de la afiliación inicial, como tampoco de los traslados posteriores entre los diferentes fondos privados se evidencia que se hubiese recibido una información integral, completa y oportuna que brindara una ilustración respecto de las características, condiciones del mercado, ventajas y desventajas de cada uno de los regímenes pensionales, así como de las contingencias financieras que tal decisión supondría en su derecho o como se dijo en la sentencia CSJ SL 6 oct.2021, rad.83576 « no prueba por sí mismo y mucho menos genera una especie de presunción relativa a que la voluntad reflexiva de la persona afiliada al materializar su acto de traslado de régimen pensional y de los posteriores tránsitos entre administradoras estaban nutridos con la debida ilustración en los términos explicados, ni así lo ha previsto el legislador».

Por lo tanto, la Sala insiste y reitera que **el solo hecho de que el afiliado se traslade en varias oportunidades dentro del RAIS, no puede convalidar, ni suplir el incumplimiento del deber de información por parte de la AFP al momento del traslado inicial** y los traslados posteriores, así como tampoco resulta ser evidencia de que el afiliado fue informado debidamente en los términos exigidos por la ley y la jurisprudencia y, menos aún puede considerarse que dicha circunstancia modera las consecuencias que ello supone en la eficacia del acto jurídico celebrado; todo esto bajo el contexto de que en el proceso quede por establecido que efectivamente el demandante no fue debidamente informado. (Resaltos de la Sala)

Visto, así las cosas, acogiendo los postulados sentados por nuestro órgano de cierre, se **CONFIRMARÁ** la decisión en este punto.

De otro lado, ha de precisarse que la aludida ineficacia no sólo implica el retorno de los dineros que se encuentren en la cuenta de ahorro individual del demandante, dígame aportes obligatorios, rendimientos, entre otros, sino que además acarrea a las administradoras del RAIS accionadas trasladar a COLPENSIONES todos los valores que hubiere recibido con motivo de la afiliación, en los términos referidos por la Corte Suprema de Justicia en la sentencia de radicación 31.989, providencia

donde la Sala de Casación Laboral adujo que la administradora debía asumir con cargo a su propio patrimonio, los deterioros sufridos por el bien administrado, incluyendo los gastos de administración en que hubiere incurrido, concepto que abarca los costos de administración, primas de seguros de invalidez y sobrevivientes, además del porcentaje destinado al Fondo de Garantía de la Pensión Mínima de acuerdo a lo previsto en el art. 20 de la Ley 100 de 1993, punto en el que se **CONFIRMARÁ** la decisión adoptada por la a quo.

Sin embargo se **ADICIONARÁ** la orden en el sentido que PROTECCIÓN también deberá devolver las cuotas de administración del tiempo que el actor estuvo afiliado en COLMENA y ING, fondos que fueron fusionados con dicha AFP, pues de lo contrario Colpensiones no estaría recibiendo la totalidad del dinero que se debe retornar conforme el claro el precedente sentado por nuestro órgano de cierre.

Y es que cuando se presenta MOVILIDAD, es decir, la persona se traslada entre distintas administradoras del RAIS, se considera necesario señalar que tal obligación respecto de los valores a retornar NO debe recaer exclusivamente en cabeza de la última entidad afiliadora en que estuvo, como en este caso lo es Old Mutual hoy Skandia, ni mucho menos se circunscribe al tiempo en que la persona estuvo en ese último fondo, de ahí que el retorno de los gastos de administración se extienda respecto de la época en que permaneció en Porvenir y Protección, como lo determinó la a quo, incluyendo el tiempo que el actor estuvo en COLMENA y ING, fondos que fueron fusionados con la anterior AFP, punto en el que se adiciona la sentencia.

Y es que la Sala de Casación Laboral, de cara a los efectos de la declaratoria de ineficacia del traslado de régimen pensional, ha sido pacífica en que ello trae como consecuencia para el fondo de pensiones del régimen de ahorro individual con solidaridad, la devolución con cargo a sus propios recursos de los gastos de administración, razonamiento plasmado, entre otras, en la sentencia de radicación 85325 noviembre de 2020, cuando señaló que:

“(…) genera, como consecuencia, la de retrotraer la situación al estado en que se encontraba como si el acto nunca hubiera existido, es decir, se debe hacer la ficción de que el traslado nunca ocurrió, lo que conlleva, por parte de las administradoras privadas, a trasladar a COLPENSIONES, el capital ahorrado junto con los rendimientos financieros, con los gastos de administración y comisiones con cargo a sus utilidades (al efecto, pueden consultarse, entre otras, las sentencias de casación CSJ SL 31989, 9 sep. 2008, CSJ SL4964-2018, CSJ SL4989-2018, CSJ SL1421-2019 y CSJSL1688-2019)”

Y nuevamente en las sentencias de radicación 77.804 y 68.087 (M.P. Gerardo Botero Zuluaga) ambas de 2020, rememoró la CSJ SL, 8 sep. 2008, rad. 31989, en la que se dijo:

“Como la nulidad fue conducta indebida de la administradora ésta debe asumir a su cargo los deterioros sufridos por el bien administrado, esto es, las mermas sufridas en el capital destinado a la financiación de la pensión de vejez, ya por pago de mesadas pensionales en el sistema de ahorro individual, ora por los gastos de administración en que hubiere incurrido, los cuales serán

asumidos por la Administradora a cargo de su propio patrimonio, siguiendo para el efecto las reglas del artículo 963 del C.C.

Tal pensamiento también fue reiterado en la sentencia 78.667 (M.P. Clara Cecilia Dueñas Quevedo), cuando adujo que:

De modo que, a juicio de la Corte, si bien no se pueden desconocer las reglas para las *restituciones mutuas* contempladas en el artículo 1746 del Código Civil, lo trascendente en la declaratoria de ineficacia de un acto jurídico es el restablecimiento de la legalidad que impone la eliminación de los efectos del acto configurado contrario a derecho y permitir, cuando las circunstancias así lo posibiliten, retrotraer las cosas al estado en que estaban como si el negocio no se hubiere celebrado.

En el *sub lite*, la devolución de todos los recursos acumulados en la cuenta de ahorro individual en el RAIS debe ser plena y con efectos retroactivos, porque los mismos serán utilizados para la financiación de la pensión de vejez a que tiene derecho la demandante en el régimen de prima media con prestación definida. Ello, incluye el reintegro a Colpensiones de los valores que cobraron los fondos privados a título de cuotas de administración y comisiones, incluidos los aportes para garantía de pensión mínima, pues será aquella entidad la encargada del manejo de esos recursos y del reconocimiento del derecho pensional

(...) De modo que, en este caso, la declaratoria de ineficacia del traslado de régimen pensional deben asumirla todas las entidades del régimen de ahorro individual a las que estuvo vinculado la actora, sin importar si tuvieron o no injerencia, o si participaron o no en el cambio de régimen pensional. Y aún en el evento de que Porvenir S.A. y Colfondos S.A. se consideren terceros, le asiste razón al actor en cuanto afirma en su oposición que, en dicha situación, es aplicable el artículo 1748 del Código Civil. En consecuencia, las AFP deben reintegrar los valores que recibieron a título de cuotas de administración y comisiones.

(...) Así, es claro que no le asiste razón al recurrente cuando refiere que «*las sumas depositadas en el fondo de garantía mínima no están en su poder*», debido a que el recaudo y manejo de las sumas destinadas al fondo de garantía mínima en el RAIS, en la actualidad, está a cargo de las administradoras de pensiones.

Y es que no puede verse afectada la sostenibilidad financiera del régimen de prima media con prestación definida, debiendo garantizarse que COLPENSIONES reciba una suma equivalente a la que hubiese generado con rendimientos financieros, en caso de que el demandante jamás se hubiese trasladado, y es claro que de acuerdo con la forma como se distribuyen las cotizaciones en el RAIS, parte de ellas se imputó a gastos de administración, compañías aseguradoras y el Fondo de Garantía de Pensión Mínima, sumas que como se dijo no puede ser inferior al monto total del aporte legal correspondiente en caso de que el afiliado hubiere permanecido bajo la administración de COLPENSIONES, máxime si la ineficacia conlleva devolver las cosas a su estado original.

Empero, ello NO quiere decir que los rendimientos causados estén llamados a engrosar las arcas de la administradora del RAIS, pues si bien corresponden a unas utilidades acumuladas por años, generadas por las diferentes inversiones realizadas por los fondos privados en cumplimiento de la eficiente gestión que les impuso la ley, lo cierto es que dichos rendimientos son uno de los ítems que conforman la cuenta de ahorro individual, que como su nombre lo dice, pertenece al afiliado y cuando este se traslada de régimen, los dineros depositados allí necesariamente pasaran al fondo común administrado por prima media.

Tal razonamiento también encuentra soporte en lo normado por el literal d) del art. 60 de la Ley 100 de 1993, según el cual el conjunto de las cuentas individuales de ahorro pensional constituye un patrimonio autónomo propiedad de los afiliados, denominado fondo de pensiones, el cual es independiente del patrimonio de la entidad administradora.

De otro lado, respecto a la indexación de los tres ítems que componen los costos de administración, esta Magistratura considera procedente **CONFIRMAR** el fallo toda vez que tal dinero (costos de administración, primas de seguros de invalidez y sobrevivientes, además del porcentaje destinado al Fondo de Garantía de la Pensión Mínima), debe ser entregado a Colpensiones debidamente indexado por parte de Protección S.A. y Porvenir respecto del tiempo de permanencia en cada uno teniendo en cuenta como índice inicial el IPC certificado por el DANE a la fecha de pago de cada aporte y como índice final el vigente a la fecha de devolución aquí ordenada, aplicando la siguiente fórmula: $\text{Indexación} = \frac{\text{índice final}}{\text{índice inicial}} \times \text{capital} - \text{capital}$. Ello por cuanto una vez entre tal dinero al patrimonio de Colpensiones, el mismo se habrá visto envilecido por el paso del tiempo.

Ya la Sala de Casación Laboral se ha pronunciado sobre estos efectos, cuando indica que la declaratoria de ineficacia del traslado de régimen pensional trae como consecuencia para el fondo de pensiones del régimen de ahorro individual con solidaridad, la devolución con cargo a sus propios recursos de los gastos de administración debidamente indexados, posición que se puede consultar en las providencias SL4811-2020, SL3207-2020, SL1688-2019, SL3202-2021, SL3706, SL3707, SL3708, SL3710 y SL3349-2021.

También resulta necesario señalar que, conforme múltiples pronunciamientos de la Sala de Casación Laboral, consúltense las sentencias de radicación SL4803-2021 y SL3710-2021¹, al momento de cumplirse la orden impartida, todas las administradoras del RAIS accionadas deberán discriminar los conceptos entregados a Colpensiones, detallando en forma pormenorizada a que corresponden cada uno de los valores entregados, punto en el que también se **CONFIRMARÁ** el fallo.

En consecuencia, la decisión adoptada en primera instancia será **CONFIRMADA** por encontrarla ajustada a los antecedentes normativos y jurisprudenciales que se han expedido en torno al tema con la **ADICIÓN** a que se hizo referencia.

Se condenará en costas en esta instancia a Protección y a Skandia a favor del demandante por no haber tenido éxito en la apelación. Se fijarán como agencias en derecho la suma de \$1.160.000.

¹ Concretamente dispusieron que: *Al momento de cumplirse esta orden, los conceptos deberán aparecer discriminados con sus respectivos valores, junto con el detalle pormenorizado de los ciclos, IBC, aportes y demás información relevante que los justifiquen.*

5. DECISIÓN DEL TRIBUNAL

Por lo expuesto, el Tribunal Superior de Medellín, Sala Tercera de Decisión Laboral, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley, **DECIDE**

PRIMERO: CONFIRMA la sentencia proferida el 14 de junio de 2022 por el Juzgado Veinticuatro Laboral del Circuito de Medellín dentro del proceso ordinario laboral instaurado por el señor **SERGIO FABIAN ZUÑIGA PAVIA** identificado con la cédula de ciudadanía Nro. 13.438.572 contra **COLPENSIONES, SKANDIA, PORVENIR, PROTECCIÓN S.A y la UGPP**.

SEGUNDO: ADICIONA el numeral tercero del fallo, bajo el entendido que **PROTECCIÓN S.A** trasladará a COLPENSIONES los tres ítems que componen los gastos de administración de acuerdo a lo previsto en el art. 20 de la Ley 100 de 1993, es decir, los costos de administración, primas de seguros de invalidez y sobrevivientes, además del porcentaje destinado al Fondo de Garantía de la Pensión Mínima, los cuales deben ser **indexados** a la fecha de pago, incluyendo el tiempo que estuvo el actor en COLMENA e ING.

TERCERO: Costas en esta instancia a cargo de Protección S.A. y Skandia. Se fija como agencias en derecho la suma de \$1.160.000 a favor de la demandante.

Lo anterior se notificará por **EDICTO** que se fijará por la Secretaría por el término de un día.

Los Magistrados
(Firmas escaneadas)


ORLANDO ANTONIO GALLO ISAZA


MARIA NANCY GARCIA GARCIA


MARTHA TERESA FLOREZ SAMUDIO

REPÚBLICA DE COLOMBIA
RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO
SALA LABORAL



SECRETARÍA

EDICTO

El Secretario de la Sala Laboral del Tribunal Superior de Medellín:

HACE SABER:

Que se ha proferido sentencia en el proceso que a continuación se relaciona:

Demandante: **SERGIO FABIAN ZUÑIGA PAVÍA**
Demandado: **COLPENSIONES, PROTECCION S.A., PORVENIR S.A., SKANDIA Y UGPP**
Radicado No.: **05001-31-05-004-2016-01299-01.**
Decisión: **CONFIRMA y ADICIONA**
Fecha de la sentencia: **19/04/2023**

El presente edicto se fija en la página web institucional de la Rama Judicial <https://www.ramajudicial.gov.co/web/tribunal-superior-de-medellin-sala-laboral/148> por el término de un (01) día hábil, con fundamento en lo previsto en el artículo 41 del CPTSS, en concordancia con el artículo 40 *ibidem*. La notificación se entenderá surtida al vencimiento del término de fijación del edicto.

Se fija hoy **20/04/2023** desde las 08:00 am. y se desfija a las 05:00 pm.

RUBÉN DARÍO LÓPEZ BURGOS
Secretario